

Crónica del mes

Febrero-Marzo

Los meses de febrero y marzo transcurrieron, principalmente, en medio de los preparativos y sorpresas de último momento que rodearon las elecciones presidenciales recién pasadas. El desenlace al que se llegó en los llamados últimos comicios electorales del siglo —en los que el partido ARENA logró aferrarse al control del ejecutivo por tercera vez consecutiva— condujo a que los institutos políticos de oposición empezaran con mucha anticipación los cambios necesarios para, a juicio de cada uno de ellos, alcanzar una victoria en las elecciones legislativas y municipales del 2000. Dentro de este contexto, la crisis desatada en marzo en el interior del FMLN a causa de la renuncia de su coordinador general y ex candidato a la presidencia, Facundo Guardado, ha ocupado un lugar preponderante. Una vez más, los acontecimientos en materia social y económica no tuvieron mucho eco dentro de la agenda informativa de los medios, aunque no por ello dejaron de presentarse ciertos elementos que revivieron viejos conflictos, especialmente en relación con el área social, donde la reactivación del movimiento sindical del sector salud se expresó en nuevas huelgas y exigencias al gobierno. Además, en el ámbito regional, la gira a través de Centroamérica que realizó el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en las postrimerías de su enjuiciamiento político, dejó muy pocas esperanzas de mejoras en la cantidad y calidad de la ayuda que dicha nación tiene proyectada para los países de la región.

En el área política, pues, el mes de febrero inició con la problemática de los secuestros que se destapó a principio del año. Las declaraciones que el ex líder guerrillero Joaquín Villalobos hizo con respecto al caso, en las que implicaba al actual

jefe de fracción del FMLN, Shafick Handal, en el raptó de varios empresarios nacionales, atrajeron la atención de la opinión pública de nuevo. Al final de enero, Handal se había defendido de tales acusaciones, después de un largo silencio, señalando al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA, Alfredo Cristiani, como impulsor de una campaña en su contra. Ante esto, Cristiani respondió enérgicamente, el 29 de enero, calificando de “patrañas” los argumentos del dirigente de izquierda. “Yo no tengo ninguna campaña en contra de Shafick Handal, tengo una campaña muy personal en contra de los secuestros y no lo hago como parte de ningún grupo”, sostuvo.

La misma postura asumió Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, al referirse a las declaraciones de Handal, mientras que el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, recomendó investigar a profundidad el caso, sin importar, según él, que exista una amnistía que se aplica sobre el acusado. Ese mismo día se supo que el “manequé”, Antonio Comejo Arango, había decidido retornar a las filas del partido ARENA, del cual se había retirado hacía aproximadamente un año. Comejo Arango, que hasta entonces se desempeñaba como diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional, argumentó que él velaba por los intereses nacionales y no personales —razón por la cual abandonaba dicho partido— y dijo haber solicitado a los demás miembros de ARENA, que lo acompañaran en su separación, que apoyaran al candidato a la presidencia del partido oficial, Francisco Flores.

El 1 de febrero, el abogado Luis González Zárate se presentó a la Asamblea Legislativa para pe-

dir que se realizara un antejuicio en contra de Handal por su supuesta participación en los secuestros investigados. Inmediatamente, Rubén Zamora, del Centro Democrático Unido (CDU), y Gerardo Suvillaga, de ARENA, dijeron que no apoyaban la iniciativa por tratarse de una jugada política más que legal y porque omitía el hecho de que a Handal lo protege una amnistía nacional. Por otra parte, el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Elizardo González, descartó cualquier tipo de desequilibrio en su partido a causa del anunciado regreso de Cornejo Arango, Mauricio Gutiérrez Castro y Sigifredo Ocha Pérez (el grupo de los "manequés") a ARENA. "Tenían ansias de poder, [de] dirigencias partidarias que nunca se les dieron", aseguró el legislador. Sin embargo, Dagoberto Marroquín (del PCN) y Suvillaga negaron cualquier pretensión de poder en el accionar de Cornejo. Al día siguiente, los preparativos para las elecciones del 7 de marzo registraron un importante avance, cuando el primer lote de papeletas de votación, destinadas para los departamentos de San Vicente, Cabañas, Chalatenango y Ahuachapán, fue entregado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entretanto, las campañas electorales que realizaban los siete partidos que competirían por el poder ejecutivo en los comicios de marzo se mantuvieron con el mismo ritmo que en enero. Las caravanas, las visitas a lugares públicos y la publicidad a través de los diferentes medios de comunicación seguía desarrollándose de la misma manera, alimentadas eventualmente por algún choque entre representantes de los partidos. El 4, Suvillaga demandó al FMLN ante el Tribunal Supremo Electoral por utilizar la parte del himno de su partido en un comercial de televisión. El jefe de campaña del frente, Julio Hernández, expresó que con el señalamiento del diputado arenero se le estaba dando relevancia a la campaña, de tal manera que lo consideró positivo. Según el Código Electoral, en caso de demostrarse le utilización indebida del himno de ARENA, el partido de izquierda se vería obligado a cancelar una multa de 50 mil colones y a suspender la difusión del comercial.

El 8, la actuación del tribunal electoral durante un simulacro de votación sembró graves preocupaciones con respecto a la organización del traslado y escrutinio de las urnas y las actas electorales. Con un costo de 50 mil colones, la operación reveló serias deficiencias, expresadas en un pobre ac-

ceso de la prensa al centro de cómputo (ubicado en el Hotel Camino Real de San Salvador), la pérdida del 22 por ciento de las 8,132 actas extendidas en el país, problemas con la base de datos y mala organización del transporte de los paquetes por la vía terrestre, entre otras dificultades. Iguales señalamientos hicieron los partidos políticos al ensayo, el 10, al analizar más detalladamente el desarrollo del mismo.

Ese mismo día, una nueva invitación a debatir, dirigida exclusivamente a los candidatos a la presidencia de ARENA y del FMLN, volvió a poner en la palestra el tema que dio mucho de qué hablar durante enero. En esta ocasión, cuatro universidades del país junto con dos organizaciones sociales estarían encargadas de organizar el encuentro. Como era de esperar, Flores no dio ninguna muestra de interés por la invitación, mientras que su principal adversario, Facundo Guardado, no titubeó en aceptar el mismo día en que se le informó del evento. El encargado de comunicaciones del partido tricolor, Walter Araujo, no sólo se limitó a informar que la propuesta sería estudiada, sino que también puso en duda el posicionamiento del Frente en el segundo lugar de las preferencias de voto. Por su parte, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, calificó la iniciativa como discriminatoria, mientras que Rubén Zamora, del CDU, añadió que aquella no contribuía en nada a la democracia y que, más bien, era demasiado condescendiente con la opción de Flores de no participar en ninguna actividad de esta naturaleza.

El 11, un breve choque entre los partidos LIDER y ARENA se desató luego de que Mauricio Meyer, director nacional del primero y candidato a la vicepresidencia, denunciara ante un fiscal electoral del TSE el supuesto robo de 36 pancartas publicitarias por parte de miembros del partido en el gobierno. Meyer aseguraba que los objetos robados se encontraban en la casa de campaña de ARENA, por lo que el fiscal Arturo Cruz Salgado procedió inmediatamente a realizar un allanamiento en el que no se comprobó el señalamiento. Un periódico hizo notar que, luego de que el allanamiento fue realizado, activistas del partido retiraron del lugar varias bolsas plásticas, sin que se pudiera determinar su contenido. Ese mismo día, la prensa nacional difundió con relativa pompa el hallazgo de un arsenal clandestino de armas en una hacienda ubicada entre León y Managua, en

Nicaragua, y cuya propiedad le fue rápidamente atribuida al FMLN por los medios informativos. Las autoridades del partido se mantuvieron al margen de los hechos y el mismo Guardado dijo abstenerse de opinar hasta que no contara con información suficiente acerca del buzón.

El 12, diputados del FMLN a la vez que negaron que ese partido tuviera alguna relación con el arsenal encontrado en Nicaragua, se mofaron de la "casualidad" de que cada vez que se acercaba un proceso electoral, apareciera uno de estos escondites de armas en algún sitio. La interpretación que hizo Kirio Waldo Salgado, del PLD, sin embargo, apuntaba a que algunos grupos del partido de izquierda, en respuesta al poco apoyo recibido en el caso de los secuestros, eran los responsables del descubrimiento. Mientras, a causa del allanamiento que se produjo en el local de campaña de ARENA, el jefe de fracción de este partido, Walter Araujo, calificó a Meyer de "nefasto y mal payaso" y aseguró que su partido discutiría la posibilidad de interponer una demanda por difamación en su contra.

El 14, en una entrevista publicada por un matutino, Salgado pareció confirmar lo que, semanas más tarde, sería la última sorpresa del PLD frente a las elecciones presidenciales de marzo. En medio de un discurso donde estaban presentes la conspiración internacional y los arreglos bajo la mesa entre las principales fuerzas políticas del país, Salgado apuntó que la presencia de Flores dentro de la fórmula presidencial de ARENA había generado las expectativas suficientes en su partido como para ofrecerle su voto en los comicios. Al día siguiente, un grave señalamiento se dejó caer con todo su peso sobre el Partido Demócrata Cristiano. El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Vinicio Cerezo, reveló que dicha organización aplicaría sanciones al PDC mientras continuara "en actitud de separación de los principios éticos de la democracia cristiana". La decisión última de tales consideraciones sería dada a conocer en mayo, fecha en que se celebrará la Asamblea General de dicha organización. Ronal Umaña, secretario general del partido, no tuvo más que decir que se sentía confundido frente a las declaraciones de Cerezo, y las atribuyó a una campaña en su contra montada por miembros del CDU.

El 22, Salgado terminó de confirmar sus intenciones de volcar a los miembros de su partido a favor del candidato arenero en las elecciones presidenciales. El máximo líder del PLD argumentó

que su decisión era más bien un trato con Francisco Flores, que se respetaría en la medida en que mantuviera firme la implementación de su plan de gobierno y que liderara una "derecha limpia". Al día siguiente, los errores que el Tribunal Supremo Electoral sacó a la luz durante el primer simulacro de votación fueron mínimamente superados en el segundo intento de ensayar la dinámica que se seguiría el día de las elecciones. Una vez más, varias actas electorales no llegaron al centro de cómputo y la falta de organización en el transporte de los documentos volvió a ser la piedra en el zapato del tribunal. Los resultados, de todas maneras, no valieron lo invertido: 200 mil colones se gastaron en esta oportunidad para detectar, a grandes rasgos, las mismas deficiencias. Finalmente, miembros de la Asociación Nacional de Ex combatientes "Comandante Mayo Sibrián" culparon al candidato a la presidencia del FMLN, Facundo Guardado, de haber ordenado la muerte de unos 500 guerrilleros entre 1985 y 1987, aunque el señalamiento no prosperó por falta de pruebas que lo sustentara.

Siempre en el mes de febrero, el conflicto que se produjo entre los empleados del sistema de salud pública y las autoridades de dicha cartera de Estado le dio nuevo dinamismo al movimiento sindical del sector médico. El origen de la polémica se debió a los rumores de que en los altos niveles del Ministerio de Salud se implementaban políticas tendientes a la privatización del servicio y al despido masivo de trabajadores del ramo. El 9, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSE) denunció la existencia de estas y otras anomalías en el interior de la cartera de Estado. Como ejemplo, el secretario general de la gremial, Guillermo Mata, sostuvo que ya habían planes de privatizar el antiguo hospital de ANTEL, hoy Hospital Roma. En concordancia con estas declaraciones, representantes de Salud informaron que la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS) estaba planeando realizar acciones de protesta, entre las cuales se contaría una huelga. Ante esto, las autoridades del ministerio ya habían avisado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que intervinieran en el caso.

Efectivamente, el 10 dio inicio una huelga que, aunque se esperaba que 15 hospitales del país y varias unidades de salud la realizaran, sólo fue

apoyada por algunos centros de salud. La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil desalojó pacíficamente a algunos huelguistas que impedían el acceso al hospital *Benjamín Bloom* y al edificio del Ministerio de Salud. El titular del ramo, Eduardo Interiano, calificó la acción como un "acto criminal", dado que se había decretado estado de emergencia nacional por el rebrote de cólera en el país. Por su parte, personeros de ANTMSPAS aseguraron que convocarían a una huelga indefinida si no se garantizaba la estabilidad laboral de los trabajadores públicos, amenazada, según ellos, por la elaboración de una Ley de la Función Pública a manos del Ministerio de Hacienda.

Al día siguiente, Interiano hizo el usual anuncio de que procedería a descontar las 8 horas que duró el paro de labores a los médicos que participaron en él, pero los sindicalistas restaron importancia a tales amenazas. Asimismo, el Ministerio de Hacienda, por medio de un comunicado de prensa, desmintió la existencia de un proyecto de Ley de la Función Pública, al menos para la presente administración, por lo que hacían un llamado a los empleados estatales para que no se dejaran sorprender por lo que calificó de rumores. Por su parte, en el interior de la Asamblea Legislativa la oposición política empezaba a considerar con mayor seriedad solicitar una interpelación de Interiano, con el fin de que aclarara la existencia de una política de privatización y de recorte de personal. En consecuencia, el 12, la llamada Red de Organizaciones No Gubernamentales Acción para la Salud en El Salvador (APSAL) expresó su apoyo a la iniciativa de los diputados de oposición.

Ese mismo día y en medio de la polémica, la Comisión Nacional de Salud, nombrada por el presidente Calderón Sol en enero de 1998 para elaborar lineamientos de reformas para dicho sector, entregó su informe definitivo al mandatario. Entre las propuestas que el documento contenía resaltaban la creación de un seguro médico universal que diera libertad al ciudadano de elegir el centro de salud (público o privado) en el que quería que se le atendiera. Con esto se pretendía despertar la competencia entre los hospitales y clínicas del país, de tal manera que el servicio que ofrezcan a la población sea de alta calidad. Además, se planteó la necesidad de que el gobierno

subsidiara las cotizaciones del seguro para personas de escasos recursos, aplicar un sistema de descentralización de la red de hospitales y establecer una estructura participativa en el sistema de salud.

El documento, asimismo, lanzaba duras críticas al gobierno por no tener como prioridad la salud de la población, y por no demostrar un verdadero interés de dotar a este sector de los medios materiales y financieros necesarios para su desarrollo. Se señaló que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se había mantenido como una estructura cerrada, y que hasta la fecha no había sido capaz de abarcar más del 20 por ciento de la población nacional. El director general de salud, Carlos Alfredo Rosales, se mostró cauteloso a la hora de establecer la conveniencia de las propuestas hechas por la Comisión. "Si el presidente dice que se deben hacer los cambios [al sistema de salud], se tendrán que hacer algunos, por ser convenientes" sostuvo.

Durante el mes de marzo, tres fueron los acontecimientos que más atrajeron la atención de los medios: la realización de las elecciones presidenciales, en las que ARENA resultó victorioso por tercera vez consecutiva; la crisis interna que se desató en el FMLN a causa de la derrota que sufrió en los comicios —la cual se vio acompañada por una serie de reacomodos que los demás partidos impulsaron inspirados por el mismo hecho—; y la gira que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, llevó a cabo por Centroamérica. Así pues, en el ámbito político, en los últimos días de febrero y los primeros de marzo, los partidos políticos más fuertes cerraron las campañas electorales que realizaban desde noviembre del año pasado. ARENA concluyó, el 28 de febrero, su larga jornada con una marcha que partió de cuatro puntos de la capital y que culminó con una concentración en el parque Libertad de San Salvador. Unas 20 mil personas abarrotaron la plaza pública en apoyo a la fórmula presidencial. Las palabras que Flores dirigió a sus contendientes fueron sugerentes: "No se preocupen por mí (...) ciertamente, yo no me preocupo por ustedes".

Por su parte, el coordinador general del CDU y líder del partido en formación Fe y Esperanza, Carlos Claramount, enfrentó las exigencias que se le hicieron durante una asamblea nacional. A Claramount se le solicitó que revelara el origen de los fondos donados para la campaña electoral y

que agilizara los trámites para la legalización del partido. No obstante, el choque quedó resuelto al finalizar la asamblea. Ese mismo día, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que un total de 452 fiscales electorales trabajarían el día de las elecciones para vigilar la transparencia y legalidad del evento.

El 1 de marzo, ARENA finalizó la presentación de su programa de gobierno —“La Nueva Alianza”— durante un encuentro realizado en las instalaciones de la Feria Internacional. Un mil quinientas personas se presentaron para escuchar el repaso de la propuesta que Flores insistentemente transmitió a través de los medios informativos. A diferencia de éste, los candidatos a la presidencia de los partidos PDC y PCN, y de las coaliciones CDU y FMLN-USC, se defendían de las críticas que varios analistas les hicieran a sus respectivos programas de gobierno. En su defensa, los candidatos argumentaron que “el pueblo no está acostumbrado a leer”, que los votos se ganaban por la ideología y no por la oferta política que presentaban, o que los programas consistían más bien en la exposición de metas vagas acerca de los temas más importantes para cada partido.

El 2, venció oficialmente el plazo para que los ciudadanos mayores de 18 años o próximos a cumplirlos retiraran su carné electoral de los centros autorizados para tal fin. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral informó que las expectativas que se tenían no habían sido cumplidas, dado que unos 174 mil documentos no pudieron extenderse. De esta forma, el padrón definitivo determinó que 2 millones 996 mil 585 salvadoreños estaban habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones presidenciales. Asimismo, se informó que unas 5 mil personas, entre periodistas y observadores internacionales, habían sido acreditadas para cubrir y verificar el desarrollo del evento electoral.

El 4, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) afirmaron que presentarían sus propias estrategias de desarrollo a quien llegara a ocupar la silla presidencial. Arnoldo Jiménez, de la ANEP, aprovechó para observar que los esfuerzos realizados por el actual gobierno, pese a que tenían valor, no habían sido suficientes para erradicar la vulnerabilidad de ciertos sectores de la economía nacional, como el sector agropecuario. Por

otra parte, Rubén Zamora, candidato a la presidencia de la coalición CDU, expresó su disposición de solicitar al gobierno cubano clemencia para el salvadoreño, Ernesto Cruz León, quien es juzgado en la isla por cometer actos terroristas en contra del Estado cubano. El candidato dijo que aceptaría a utilizar su influencia en el caso de que la familia del acusado se lo pidiera y que la justicia cubana lo condenara a pena de muerte por sus actos.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral continuó revelando datos logísticos de las elecciones, y ese mismo día informó que doce mil agentes de la Policía Nacional Civil (el 60 por ciento de la fuerza policial del país) serían desplegados para custodiar el orden y la legalidad de los comicios. Los partidos tampoco se quedarían atrás en esta tarea. Carlos Quintanilla Schmidt, candidato a la vicepresidencia de ARENA, reveló que entre 35 y 40 mil personas representantes de su partido formarían parte del grupo de apoyo para el evento. El FMLN dijo contar con 35 mil vigilantes; el CDU poseía 4200; y el PDC se valdría de un equipo de 50 abogados para asesorar la vigilancia en San Salvador.

En este marco, el 5, según datos no oficiales publicados por un matutino, el costo de la maquinaria electoral montada por los partidos políticos que participarían en las elecciones ascendía a unos 63 millones de colones, buena parte del cual provenía de la cancelación de la deuda pública que el Tribunal Supremo Electoral entrega a los institutos políticos que compiten en los eventos electorarios. Así, el FMLN habría invertido un aproximado de 11 millones de colones, el PCN un poco menos de 10 millones, el PDC invirtió 7 millones, LIDER menos de 5 millones y PUNTO gastó menos de 300 mil. Y el TSE volvió a divulgar datos concernientes a los comicios. En esta ocasión se confirmó la habilitación de 387 centros de votación (con 8 mil 132 urnas) en todo al país, quienes tendrían que recibir a los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio. Además, la cifra de observadores internacionales se elevó a 1000.

Entre tanto, la fórmula presidencial de ARENA adelantaba su victoria al anunciar el inicio de las gestiones para conformar su gabinete de gobierno. Flores, candidato a la presidencia, aseguró que convocaría una comisión especial cuya tarea sería buscar ternas para extraer a los miembros de su consejo de ministros. “Vamos a nombrar una comisión constituida por gente de confianza del

partido, gente notable por su prestigio y capacidad. Anunciaremos públicamente que queremos recibir opiniones para saber quién es la gente más competente de este país”, dijo Flores.

El 6, el número de personas aptas para votar en las elecciones del día siguiente alcanzó los 3 millones 171 mil 224. De ese número, las mujeres constituyen un 50.65 por ciento, perfilándose como la mayoría de electores. Además, casi un tercio del padrón estaba conformado por jóvenes con edades entre los 18 y 29 años. El centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en el hotel Camino Real, albergaría 150 computadoras y 60 máquinas de fax para alimentar la base de datos, con lo cual se esperaba poder dar resultados preliminares aproximadamente entre las seis y siete de la noche del día 7.

El día de las elecciones al fin llegó para los salvadoreños y en su desarrollo, aunque tranquilo, prevaleció el ausentismo. Al menos los dos partidos más fuertes seguían de cerca, y con sus propios centros de cómputo, el conteo de los votos depositados en las urnas. No obstante, la casa madre del partido ARENA permaneció oculta a la prensa aún después de realizados los comicios, pero aún con eso, éste fue el primer instituto político en difundir a la opinión pública resultados parciales: por supuesto, Flores dijo poseer los datos suficientes para asegurar su triunfo con el 53 por ciento de los votos escrutados a su favor. Los medios televisivos habrían confirmado con anterioridad esta tendencia aunque con leves diferencias. De cualquier modo, todos los anuncios extraoficiales apuntaban a que ARENA estaba a la cabeza de la contienda, seguido no tan de cerca por el FMLN y por el CDU, que habría desplazado del tercer lugar al PDC. Los diputados del FMLN, Ileana Rogel y Oscar Ortiz, calificaron de prematura la autodeclaración de Flores. Guardado se mantenía firme en sostener que los datos confirmaban la necesidad de asistir a una segunda vuelta electoral.

Al las 7:30 p.m., el Tribunal Supremo Electoral estaba listo para dar a conocer, sin mayor sorpresa, los resultados preliminares oficiales: efectivamente, ARENA alcanzaba ya el 53 por ciento de los votos. Era el anuncio casi definitivo de su tercera victoria consecutiva en la lucha por la presidencia del país. Al día siguiente, los datos no fueron igual de alentadores en términos de asistencia a las elecciones, puesto que el promedio regis-

trado revelaba que sólo 160 ciudadanos concurren por urna, las cuales habrían tenido que recibir a 400 personas. Esto significaba que de los 3 millones de electores, solo asistieron 1 millón 181 mil 996. Las declaraciones del presidente del TSE, Jorge Díaz, fueron aún más desalentadoras: “del monto de los votantes no tiene mayor responsabilidad el Tribunal, esto tiene que ver con el entusiasmo que genere la campaña”, señaló.

El 8, las sorpresas continuaron. El Partido Demócrata Cristiano, por haber sido relegado al cuarto lugar en la preferencia de voto, había perdido el derecho de gozar con una representación en el Tribunal Supremo Electoral. En su lugar, la coalición del Centro Democrático Unido había quedado habilitada para ello. Ronald Umaña, secretario general del PDC, aseguró que, de ratificar una enmienda hecha a la ley electoral en la legislatura pasada, se podría separar lo jurisdiccional de lo administrativo, aunque no aclaró en qué forma podría beneficiar eso a su magistrado saliente. Mientras tanto, Rubén Zamora, ex candidato presidencial del CDU, aseguró que el nuevo magistrado no sería un político. Mientras tanto, Guardado apareció frente a los medios para aceptar —mucho más accesible que en las conferencias dadas el día anterior— la victoria de Flores, de quien dijo había logrado “interpretar la necesidad del cambio”. Sin embargo, sus palabras sugerían que en su derrota, el factor Flores no había sido el único determinante. De hecho, el también coordinador del partido de izquierda aseguró que los medios informativos ya habían identificado con antelación aquellos sectores del FMLN que no le brindaron todo el apoyo que necesitó durante la campaña. Estas declaraciones significaron un anuncio público de una pugna interna en las filas efemelenistas, que hasta la fecha no ha sido resuelta.

Por su parte, Flores celebraba su victoria en cada medio informativo que tocaba a su puerta para solicitarle declaraciones. En este sentido, el presidente electo aseguró a un rotativo que los cargos en el gabinete de gobierno que le acompañarían hasta el 2004 no habían sido comprometidos ni negociados con ninguna persona, grupo o sector que hubieran colaborado en su campaña. Pero no todo era transparencia entre las filas del partido de gobierno. Ese mismo día se confirmó la detención provisional de los alcaldes de Villa Dolores y Jutiapa, Osmín Figueroa y José Sigüenza, por haber comprado y/o inducido el voto a favor del par-

tido ARENA. El silencio infranqueable de la dirigencia del partido rodeó este hecho. Adicionalmente, las muestras de apoyo provenientes del sector privado del país ocuparon lugares más importantes en la coyuntura. Ricardo Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresó su disposición de trabajar de la mano de Flores, no sin antes recordarle la necesidad de potenciar la inversión pública en el área social, la infraestructura, educación y vivienda. Por su parte, la presidenta de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), Patricia de Parras, recomendó al nuevo gobierno iniciar una política de modernización que no se centre únicamente en la privatización de los servicios públicos, sino en la agilización de los trámites gubernamentales. A esta gremiales se sumaron la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial, FUSADES y la Cámara de Comercio de El Salvador.

El 10, el presidente del COENA, Alfredo Cristiani, interpretó la victoria de su partido en las elecciones presidenciales como una recuperación del voto arenero perdido en las elecciones municipales y legislativas de 1997. Bajo una lógica poco usual para la línea política que ARENA ha mantenido frente al tema, Cristiani propuso, como solución al ausentismo que se registró en las elecciones, la implementación del voto domiciliar, el ordenamiento del padrón electoral y la conformación del documento único de identificación. El 12, representantes de los partidos PDC, PCN y de la coalición CDU expresaron su disposición de iniciar cuanto antes un proceso de evaluación interna, con el fin de presentarse como opciones fuertes frente a la población en los comicios del 2000. Zamora, del CDU, mencionó la posibilidad de que la coalición se mantuviera firme para convertirse en un "partido nacional".

La dinámica que siguió a las elecciones permaneció en relativa calma hasta que, el 15, Guardado, en calidad de coordinador general del FMLN, anunció que renunciaría a este cargo y a su puesto en la Comisión Política, como una forma de recriminar a las que llamó "minorías" del partido el entorpecimiento de su papel en la campaña electoral pasada. Con esto, el ex candidato a la presidencia se proponía iniciar una lucha para convertir al FMLN en un partido de las mayorías. Junto con él también renunciaron de sus cargos en la dirigencia del partido María Marta Valladares, ex candidata a la vicepresidencia, Francisco Jovel y Violeta Men-

jívar, coordinadores adjuntos. Además, al esfuerzo que realizaría Guardado se sumó el diputado Raúl Mijango, quien se dice que encabeza una de las corrientes reformistas del partido de izquierda. Desde su esquina de la lona, Cristiani lanzó su propia interpretación del hecho: "más que una recomposición de fuerzas, es el resultado lógico de la pérdida de liderazgo de Facundo", opinó. La Comisión Política del Frente abrió una sesión permanente para discutir una posible recomposición del partido. Se esperaba que para el 19 de marzo ya se hubiera consolidado una línea de acción.

Al día siguiente, Guardado fue más enfático al acusar a las que esta vez llamó "sectas reducidas" de oponerse a su candidatura y a su trabajo desde la coordinación general. El ex guerrillero asoció directamente a estas "sectas" con la llamada tendencia comunista, supuestamente liderada por Shafick Handal. Este, por su parte, a la vez que dijo respetar la decisión de Guardado, se mostró en total disposición de participar en un proceso de recomposición del partido que, a su juicio, debía comenzar con la reforma del marco legal del partido. Mientras tanto, el antiguo militante activo del FMLN, Dagoberto Gutiérrez, no sólo no ocultó su disgusto con la candidatura de Guardado para las elecciones, sino que calificó de lúcida la decisión tomada por éste.

En los días que siguieron, la discusión sobre el futuro del FMLN se desarrolló a puerta cerrada, entre encerronas y reuniones informales de las cuales la prensa tuvo muy poco conocimiento. Sin embargo, algunos diputados revelaban los contenidos a medias de dichas discusiones. El 18, tanto Raúl Mijango como María Marta Valladares coincidieron al señalar que en el interior del FMLN se estaba reconsiderando la posibilidad de legalizar cada una de las tendencias que cohabitan en él. La idea, proveniente del grupo atribuido a Handal, encontraba una férrea oposición de parte de las corrientes reformistas. El 20, tal y como se tenía previsto, la Comisión Política estuvo lista para emitir su valoración de lo sucedido en el partido. En un comunicado de prensa, prometieron que realizarían una evaluación serena y objetiva de las causas de la derrota sufrida en las urnas y reconocían el trabajo realizado por Guardado y Valladares en ese contexto. Sin embargo, el proceso de evaluación no quedó aislado de los choques que se producían entre representantes de las diferentes tendencias del partido. De este modo, la dirigencia tuvo que suscribir, el 26, un

acuerdo por medio del cual todos aquellos que participaran de las conversaciones sobre el tema se comprometían a no utilizar insultos para atacar a los correligionarios que no compartieran sus puntos de vista. Todos los líderes del Frente coincidieron en calificar a la medida como satisfactoria.

Finalmente, otro de los acontecimientos que capturó gran parte de la atención del mes de marzo fue la visita del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a Centroamérica. Con esta gira, el mandatario estadounidense seguía los pasos de su esposa, Hillary, al verificar el estado en que la región había quedado luego del paso de la tormenta tropical "Mitch", en noviembre de 1998. Aunque en ambas ocasiones, el matrimonio Clinton aseguró realizar los esfuerzos necesarios para conceder ayuda económica desde la presidencia, en ninguna de las visitas lograron alimentar más que esperanzas entre el gobierno y el sector privado del Istmo. Originalmente, la visita estaba programada para el mes de febrero, pero la Casa Blanca no titubeó mucho en posponerla en vista de que esa misma semana se desarrollaba, con la mayor ferocidad, el juicio político impulsado en contra de Clinton por su relación con Mónica Lewinsky.

Todo el mes de febrero sirvió a los representantes de los gobiernos de Centroamérica para consolidar una agenda unificada de temas que le presentarían al presidente de Estados Unidos, de tal manera que, de lograr algún compromiso concreto durante su estadía, éste reeditaría en todos los países de la región. Sin embargo, el perdón de la deuda estaba dirigido concretamente para Nicaragua y Honduras, por ser estos los países más afectados por el fenómeno climatológico. Así, en la Cumbre se discutiría en torno a los siguientes ejes: perdón de la deuda, cooperación financiera y fomento a la inversión, medio ambiente y tráfico de drogas, reconstrucción de la economía y migración. La gira de Clinton iniciaría el 8 con la visita a Nicaragua. Al día siguiente, el mandatario llegaría a Honduras y el 10 estaría en nuestro país. El 11 partiría de El Salvador —donde había establecido su lugar de descanso— para asistir a la cumbre de Antigua Guatemala, y ese mismo día regresaría a Estados Unidos. Clinton no vendría solo a la región, sino que traería una comitiva de representantes del sector empresarial de su país, aparte de un buen número de periodistas y personal de seguridad. Se estimó que unas 700 se hospedarían en varios hoteles de nuestro país durante los días

en que permanecería aquí.

El ministro de Relaciones Exteriores, Salvador González Giner, indicó que nuestro gobierno prestaría particular atención a la política migratoria y a la posibilidad de concretar un tratado bilateral de extradición. Este tratado no ha fructificado debido a la oposición que mantiene el FMLN desde la Asamblea Legislativa para su ratificación. Con la firma del tratado, según González Giner, se beneficiaría a buena parte de los inmigrantes centroamericanos, puesto que el gobierno de Estados Unidos quedaría habilitado para actuar legalmente en contra de determinados infractores, sin necesidad de recurrir al endurecimiento de la política migratoria. Ese mismo día, personeros del gobierno de Costa Rica expresaron los objetivos que mantendrían durante la discusión de los beneficios en el área financiera y comercial: ampliar lo estipulado en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), de manera que las condiciones de intercambio de la región se equiparen a las que cuenta México, en su calidad de miembro del Tratado de Libre Comercio que, junto con Estados Unidos y Canadá, conforma el NAFTA (North América Free Trade Area). De hecho, los ministros de comercio de Centroamérica adoptaron esta postura dentro de la agenda que se le presentaría a Clinton.

Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa anunciaron que se sumarían al llamado que el presidente Calderón Sol haría a su homólogo de Estados Unidos con respecto a la situación de los inmigrantes Centroamericanos en dicha nación. El 3, buenas noticias se asomaron desde la potencia norteamericana. El vicesecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Peter Romero, reafirmó el compromiso norteamericano para la reconstrucción del Istmo. Romero recordó que la administración Clinton ha enviado al congreso un paquete de ayuda a Centroamérica por casi mil millones de dólares, de los cuales El Salvador recibiría 21 millones. Igual optimismo había mostrado el consejero del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Paul Virtue, al asegurar que la devastación dejada por el "Mitch" era suficiente para demostrar que los indocumentados pasarían penurias si llegaban a ser deportados. Este es uno de los requisitos que la actual legislación migratoria estadounidense exige para otorgar residencia a los centroamericanos.

Pero el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos no compartía la misma

opinión. Esta oficina gubernamental había anunciado, el 4 de marzo, la reanudación de las deportaciones de salvadoreños y guatemaltecos que residen ilegalmente en dicha nación. La medida daría inicio el día 8 del mismo mes, fecha en la que Clinton iniciaría su gira por los países de Centroamérica. Se estimaba que sólo a nuestro país serían devueltos 5000 indocumentados en todo el año. En todo caso, las autoridades de Inmigración insistieron en que su gobierno no estaba llevando a cabo deportaciones masivas y que las estadísticas se mantenían dentro de lo que ellos consideraban normal. El 8, finalmente llegó a nuestro país quien tenía la última palabra. Bill Clinton fue recibido por el alcalde de San Salvador, Héctor Silva, y por el presidente Calderón Sol. En el encuentro, los mandatarios intercambiaron breves discursos en los que enfatizaron sus buenas intenciones y su creencia en los valores familiares y espirituales más altos.

Durante su visita en Nicaragua, el presidente apareció con mucho menos ímpetu del que se esperaba. Ofreció ayuda equivalente a 956 millones de dólares para la región, la liberación de las barreras arancelarias y la condonación de gran parte de la deuda de Honduras y Nicaragua. Sin embargo, sus esfuerzos no podían pasar por encima de lo que determinarían los congresistas de su país, en manos de quienes se encontraba la aplicación de dichas medidas.

El 9, un embajador de nuestro país en Estados Unidos adelantó que Clinton había expresado su comprensión "total" en relación con la ampliación de beneficios de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Desagravio Centroamericano (NACARA, por sus siglas en inglés). Al día siguiente, durante su visita a nuestro país, se confirmó el establecimiento de un tratado bilateral de inversiones, el cual sería firmado por el canciller González Giner y la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson. La diplomática expresó su interés de que, con el tratado, el flujo de inmigrantes salvadoreños se detenga y el desarrollo económico reciba un importante impulso, de manera que los ingresos generados internamente lleguen a sustituir a las remesas familiares del extranjero. En su discurso a los diputados de la Asamblea Legislativa, el mandatario estadounidense enfatizó acerca de la importancia de que el flujo de inmigrantes se redujera drásticamente, la firma del tratado de extradición y la adquisición de tecnología que respetara el equilibrio ecológico.

Ese mismo día partió hacia Guatemala, donde expresó su voluntad de "echar luz a los oscuros acontecimientos del pasado, para que jamás vuelvan a repetirse", con lo que trató de dar respuesta a las severas críticas que ha recibido el gobierno de su país por participar en el mantenimiento de regímenes militares y del mismo conflicto armado que azotó el suelo guatemalteco. De hecho, la visita del mandatario fue recibida por varias protestas que grupos feministas y campesinos hicieron en las calles de la capital. Estos exigían que Clinton aceptara su responsabilidad en la situación del país durante las décadas de la guerra. Durante su discurso, Clinton no mencionó nada acerca del estatus migratorio de los miles de indocumentados guatemaltecos que radican en Estados Unidos. Una vez iniciada la cumbre, el 11, el tacto con que Clinton abordaba el tema de los inmigrantes se hacía cada vez más áspero. El gobernante mostró su preocupación de que un tratamiento especial a los centroamericanos podría provocar nuevas oleadas de inmigrantes hacia su país y aseguró que, en el área de política migratoria, todo lo que se podía hacer ya estaba hecho.

Empero, se detalló que la administración Clinton proveería 25 millones de dólares, en un plazo de 5 años, para apoyar la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. Esto incluye programas de conservación de bosques, manejo de las zonas costeras, mitigación de los efectos de los cambios climatológicos y reducción de la contaminación industrial. Guatemala recibiría 25 millones de dólares adicionales como apoyo al proceso de pacificación que vive desde hace dos años. Este dinero se invertirá en el sector justicia, en programas de becas de estudio para niños indígenas, alfabetización de adultos, así como en apoyo a la microempresa. El paquete incluye un fondo de 11 millones de dólares desembolsables en tres años para fortalecer el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica. Clinton también anunció el desembolso de 8.2 millones de dólares para apoyar programas orientados a combatir el trabajo infantil. Por último, el Gobierno estadounidense prometió apoyo técnico para los programas de reinserción de los niños de la calle.

Al final, el documento suscrito en Antigua Guatemala, por sí mismo, sólo constituía un resumen de buenas intenciones y esfuerzos ya realizados que debían intensificar sus efectos. Los verdaderos

frutos que se obtuvieron de la cumbre se establecieron bilateralmente con cada país que Clinton visitó. Pero la voluntad del Congreso de Estados Unidos de apoyar un proceso de reconstrucción realista para la región quedó en tela de juicio cuando, el 18, aprobó, con 71 votos a favor y 29 en contra, una ley de ayuda para Centroamérica y para otros programas de emergencia y establecieron condiciones que no concordaban con lo prometido por la Casa Blanca. La ley prevé la concesión de 1900 millones de dólares, de los cuales la mitad tendrá que destinarse a la reconstrucción de la región y la otra al financiamiento de programas de salud pública y en contra del consumo del cigarrillo. Representantes de la Casa Blanca anunciaron que el presidente Clinton vetaría sin mucho reparo la mencionada ley. La decisión del Senado iba acompañada de una iniciativa republicana para costear la ayuda a la región recortando fondos de programas internos, impulsados por los demócratas. Así, el beneficio de la región quedaba atrapado en medio de la lucha de dos partidos por ejercer control sobre las decisiones de la presidencia.

En definitiva, no cabe duda que durante este período, el desarrollo de la campaña electoral, el desenlace de los comicios y las consecuencias que se han presentado, junto con las expectativas que han despertado entre la población, eran elementos que, de una u otra forma, ya se esperaban. De hecho, la victoria del partido de gobierno por tercera ocasión consecutiva no representó mayor novedad, si se considera que la oferta política que abanderaba no tenía muchas diferencias con la presentada por el FMLN. En este sentido, hay que apuntar que la utilización de una campaña que extendió

sus brazos por todos los medios de difusión masiva posibles pudo haber sido más determinante que el contenido mismo de los programas de gobierno. Al final, tampoco era importante demostrar un demolidor apoyo del grueso de la población, sino más bien —tal y como el mismo presidente del COENA, Alfredo Cristiani, lo reconoció— recuperar el voto perdido en las elecciones de 1997, esperando que con esto el partido alcanzara a cumplir con un requisito legal: ganar con la mitad más uno de los votos.

En estos momentos, lo que debería constituir el centro de la atención es la promesa hecha por Flores con respecto a la conformación de un gabinete de gobierno con mayor independencia del partido. Si esto llegara a realizarse, se podría pensar en que el presidente electo en verdad daría continuidad a sus promesas de una nueva forma de hacer política. Esto implicaría que Flores en verdad está consciente de su papel como presidente de un país, y que no sólo responde a los lineamientos que, desde las alturas de la cúpula arenosa, se le ordena seguir. Por el lado del FMLN, era casi imposible que al choque entre las tendencias, que se generó previo a la elección de Guardado como candidato a la presidencia, no le siguiera un conflicto todavía mayor luego de una derrota, para algunos, ya anunciada. En este sentido, el verdadero reto del partido de izquierda radica en demostrar capacidad de renovación y definición de cara a la realidad nacional, y no en función de intereses sectarios. Y esto significa abandonar la pretensión de unidad que ha prevalecido en el momento en que las diferencias internas salen escandalosamente a la luz, a favor de un “sereno y objetivo” análisis de las tendencias que subsisten en su interior.